

España: 1,9 empleados por pensionista

■ Ana Sánchez Arjona

Enero de 2013 empieza como lo hicieron enero de 2012, 2011 y 2010...destruyendo empleo sin tregua y con la **Seguridad Social** inmersa en una grave crisis. Pierde 8.500 cotizantes al día y retrocede a niveles de 2002.

Hay un dato que es aplastante y no necesita explicación. El número de afiliados con empleo por cada pensionista. En enero el ratio no llega a dos, el más bajo desde 1997, y se sitúa en 1,96. Sube hasta los 2,31 si se toma como referencia a los trabajadores en paro por los que, el **Servicio Público de Empleo**, paga la correspondiente cuota.

Es decir, por debajo de las dos unidades, lo que se interpreta como la línea roja que señala la sostenibilidad del sistema de protección social.

Tal es así que la firma del **Pacto de Toledo** en 1995 tuvo que ver, precisamente, con la circunstancia de que ese año la relación afiliados-pensionistas llegó a caer por debajo de las dos unidades. Y fue en ese momento cuando los grandes partidos se pusieron manos a la obra para evitar la quiebra.

Las cosas están especialmente mal en el régimen general, esencial para el sistema por su enorme peso, que contabiliza caída de empleo del 5,4%, por encima de la media. Sin embargo, el ritmo de destrucción entre los autónomos se sitúa en el 1,18%, porcentaje que respira cierto



T. Burgos.

F. MORENO

“El ratio de afiliados con empleo por cada pensionista, en enero, no llega a dos, el más bajo desde 1997. Sube hasta los 2,31 si se toma como referencia a los trabajadores en paro por los que el Servicio Público de Empleo paga la correspondiente cuota”

“Es urgente un plan para impulsar el empleo o, por lo menos, intentar que no desaparezca poco a poco el tejido empresarial y laboral que nos queda y potenciar así la recuperación”

sesgo ya que un alto número de asalariados han tenido que reconvertirse en empleados por cuenta propia para poder mantener su puesto de trabajo.

Los cálculos iniciales pronostican que, diciembre sobre diciembre, en 2013 se perderán aproximadamente otros 430.000 empleos. El Gobierno intenta matizar esta caída en picado y persistente explicando que el ritmo de bajas en las afiliaciones se va haciendo progresivamente más lento. Pero la consecuencia inmediata es que no hay margen de maniobra para retocar el sistema de pensiones, tal y como tiene intención de hacer el Ejecutivo y, sobre todo, que se acrecienta el malestar social, incubado desde hace meses, y se convierte en dinamita para el posible inicio de recuperación.

Las cifras dificultan que 2013 pueda cerrar con creación neta de empleo, a juicio de los analistas y los datos de afiliación suponen un importante hachazo a la confianza económica. A pesar de todo, el secretario de Estado de Seguridad Social, **Tomás Burgos**, apunta que enero es el mes más negativo para la afiliación y “suele ser antesala de una cierta recuperación”, por lo que espera que a partir de febrero la situación se estabilice y crezca el número de ocupados.

Aunque en términos intermensuales la contracción suele ser dura por el fin de la campaña navideña, la comparativa interanual no da argumentos en favor del

optimismo: el empleo descendió un 4,6% frente a enero de 2011. Es la peor evolución en esta crisis, salvo el 5,1% de caída registrado en enero de 2009, año del gran descalabro en el mercado laboral español.

El descenso en la afiliación nos pone frente a otro problema, de carácter mucho más estructural que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tomás Burgos aprovechó su comparecencia para dar a conocer los datos y adelantar que el déficit de la Seguridad Social estará en torno a los 5.800 millones, sin tener en cuenta el **Fondo de Garantía Salarial** (Fogasa) y el servicio público de empleo, que serán los que terminen por elevar esta cifra por encima de los 10.000 millones, si no fallan las estimaciones.

Por lo tanto, es urgente un plan para recuperar el empleo o, por lo menos, intentar que no desaparezca poco a poco el tejido empresarial y laboral que nos queda y potenciar así la recuperación. Las directrices de recorte del gasto hacen imposible levantar una estrategia de empleo autónomo, con una parte importante de inyección presupuestaria. “Es prioritario, por una parte, forzar a las autoridades europeas, en especial a Alemania, para que el capital de la **Zona Euro**, poco o mucho, se ponga a disposición que los ciudadanos y se invierta en estimular el empleo juvenil. Algunos países del centro y norte del continente han obtenido buenos resultados con sus

programas de acción laboral, legal e inversora, hasta el punto de que el paro juvenil en algunos casos apenas supera el 2%”, dice el catedrático de Derecho Laboral, **Jaime Canales** quien añade que también sin dinero se pueden activar planes que favorezcan la ocupación. “Lo que no se puede discutir es que cualquier ayuda que se inyecte en forma de subvención o apoyo fiscal debe estar basada en resultados reales y perfectamente mensurables; cada euro invertido o dejado de ingresar tiene necesariamente que estar vinculado a una contrapartida rigurosa de generación de empleo”.

Se debería reconsiderar los gastos fiscales y ver que las desgravaciones actuales para crear puestos de trabajo son efectivas; si no es así, habría que estudiar la necesidad de eliminarlas y articular otras menos gravosas y más resolutivas.

Sindicatos y patronal reclaman “un giro de 180 grados en el planteamiento de las políticas económicas para que se basen en el crecimiento”, dice **UGT** un argumento que comparte **CC OO**, para quien todo esto tiene que estar aderezado con una reforma fiscal y financiera. Por su parte, la **CEOE** insiste en “la necesidad de incentivar la actividad económica, suprimiendo el encarecimiento de algunos costes, de propiciar una simplificación normativa y de impulsar iniciativas adicionales que apoyen a las empresas”.

Crónica mundana

Obama pone contra las cuerdas a las agencias de calificación

■ Manuel Espín

La enorme influencia de las agencias de calificación las concede un auténtico poder de enorme peso en la economía mundial. El oligopolio de tres compañías (**Standard & Poor's**, **Moody's** y **Fitch**) que controlan el 90 % del mercado mundial, es decisivo para valorar la deuda y los presupuestos de los gobiernos y de las compañías. Ahora, y de manera inesperada, el Departamento de Justicia norteamericano, junto a varios estados, anuncian acciones legales contra Standar a la que acusan de una mala valoración en los riesgos de los activos financieros antes de la crisis de 2007, de la que todavía no ha salido ni Estados Unidos ni Europa. En 2007 se otorgó a la deuda garantizada sobre las hipotecas inmobiliarias, un producto muy sofisticado, la calificación máxima de AAA, calificando su riesgo de “muy bajo”. A los pocos meses estallaba en cadena la crisis de las hipotecas “sub prime” y buena parte de esos productos se revelaron como verdaderamente “tóxicos” e “invendibles”. Ahora Justicia pide responsabilidades más de un lustro después del inicio de la crisis y pone en su punto de mira

a la primera de esas agencias. La alta exposición de los bancos a esos productos de deuda fue una de las causas de la monumental fractura de 2007-2008 tras la caída en el abismo de distintas entidades en lo que ha sido la crisis más grave de la economía occidental desde 1929. Lo que sorprende es que el inicio del procedimiento se realice a cámara lenta, muchos años después de que estallara la bomba de las “sub prime”. Parece responder también a una creciente inquietud que busca exigir responsabilidades tanto a quienes supuestamente evalúan (las agencias) como a los organismos reguladores y supervisores; dentro de un itinerario que discurre tanto por el Banco de España en los años del “boom del ladrillo” y la “barra libre” de las hipotecas, como por Italia (donde estos días se cuestiona el papel de Draghi entonces al frente del Banco de Italia y hoy del **BCE**), al no haber sabido evaluar los riesgos de entidades en plena caída libre), a los propios Estados Unidos en la “era de las desregulaciones” de los **Bush**.

Standard se defiende “lamentando” que sus calificaciones no supieran anticipar plenamente el rápido deterioro del mercado hipotecario

en Estados Unidos”, pero dice que “también los funcionarios del gobierno federal declararon en 2007 que el problema de las hipotecas de alto riesgo parecía totalmente controlado”. La demanda a Standar podría ser el primer episodio de una historia en la que también Moody's y Fitch tendrían que asumir responsabilidades. Promete además abrir una batalla legal sin precedentes dentro de la administración **Obama**, por cuanto hasta ahora tanto en Europa como en Norteamérica parecen insuficientes las tipificaciones legales sobre las actuaciones de estas entidades, ya sea por activa (calificaciones) o por pasiva (dudoso papel de los supervisores). La iniciativa induce un elemento positivo a favor de una mayor transparencia dentro de un universo tan opaco como el mundo económico. Hasta ahora las agencias han venido actuando como un verdadero poder real, sin contrapeso alguno, y sus datos han condicionado todos los procesos, con influencia directa sobre las primas de riesgo.

La primera en ser objeto de un procedimiento legal para asumir supuestas responsabilidades, Standar, ha digerido muy mal el golpe inicial, con una caída del precio de sus acciones. Con



B. Obama.

“Abre procedimiento legal contra Standard & Poor's por no haber sabido valorar los riesgos de activos hipotecarios en la crisis de las ‘subprime’ de 2007”

“Las agencias dicen que ‘no hay base jurídica’ y que ‘trabajan de buena fe’

antecedentes que se remontan a la expansión de las compañías de ferrocarril en el siglo XIX y a sus valoraciones, en 1966 fue adquirida por **Mc.Graw-Hill** ganando un enorme peso mundial, en labores como la elaboración de los índices bursátiles en Norteamérica, Australia, Canadá, Italia o India. El enorme poder adquirido con sus calificaciones ha tenido una directa incidencia en las economías y la política de muchos países. En 2009 se la criticó por haber recomendado en plena crisis de Irlanda “nuevas caras para el gobierno”, lo que fue interpretado como una entrada en decisiones que corresponderían a sus ciudadanos. Los críticos del sistema como **Paul Krugman** consideran a las agencias poco menos que “inútiles”. En 2010 afirmaba: “No saben de los presupuestos del gobierno más que el chico que está leyendo el periódico en la calle”. Pero lo cierto es que siguen siendo la referencia permanente, y sus informes y valoraciones son esperadas/temidas por la totalidad del mercado. Ahora se las quiere poner el cascabel al gato a base de “rigor”, “independencia”, y sobre todo “transparencia”. Queda mucho camino por recorrer.